



Alguna vez fue una collpa muy visitada por los animales del bosque (las collpas son áreas particularmente ricas en minerales), pero hoy es un desierto creado por la contaminación petrolera. Huayurí, cuenca del río Corrientes.

El noroeste de Loreto —también conocido como Abanico del Pastaza (ver mapa)— fue una de las primeras zonas de la Amazonía peruana en abrirse a la explotación petrolera. En 1971, Petroperú y la Occidental Petroleum Company (también conocida como Oxy) iniciaron exploraciones en el río Corrientes, y en 1974 encontraron reservas cuya explotación llegaría a cubrir el 40% de la producción nacional de hidrocarburos.

Durante los siguientes treinta años, más del 95% de los 1'118,174 barriles diarios de las altamente tóxicas aguas de producción de los pozos de los lotes 8 y 1AB fueron vertidos directamente a ríos y quebradas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre, amén de un número no calculado de derrames de crudo. La contaminación y destrucción de ecosistemas generado dejó, también, una secuela de enfermedades y muerte entre los grupos indígenas que habitan el área.

En un reciente ensayo¹, el antropólogo Julio Postigo y la bióloga Mariana Montoya —ambos candidatos a doctores en geografía en la Universidad de Austin, Texas, EE.UU.— analizan el impacto de las actividades petroleras en tres grupos indígenas del Abanico del Pastaza, y dan cuenta de algunas de las causas más importantes que se encuentran tras los conflictos que, cada vez con mayor frecuencia, protagonizan en la selva peruana nativos, empresas petroleras y el propio Estado.

Las semillas del conflicto

La traumática experiencia de dos grupos nativos con empresas petroleras revela por qué esta actividad genera tanto rechazo en la selva.

Caso 1: los achuar del río Corrientes

Cuando, en 1971, Petroperú y Oxy iniciaron exploraciones en el área, las comunidades achuar del río Corrientes no fueron informadas ni, mucho menos, consultadas. Pero durante los años que siguieron, empezaron a sufrir una serie de enfermedades desconocidas para ellos, y que atribuyeron a la contaminación petrolera, así como muchas muertes inexplicables que no discriminaban entre adultos, jóvenes y niños.

Las empresas, con el respaldo del Esta-

do peruano, no reconocieron el daño producido. Hubo que esperar a 2005 para que, por fin, se reconociera oficialmente que los nativos tenían la razón. Un estudio del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección Ambiental para la Salud (Censopas), del Instituto Nacional de Salud (INS), hecho con muestras de sangre de 199 nativos achuar de 7 comunidades del río Corrientes, mostró que el 74.4% de los examinados presentaban concentraciones de plomo mayores a las permitidas por la legislación nacional e internacional, y 98%, de cadmio². Ambos son metales pesados que pueden causar trastornos graves y la muerte.

Luego del retiro de la Oxy empezaron a aparecer los primeros casos de hepatitis B y Delta entre los kandozi, y para el 2000 la tasa de incidencia era más del doble de la tasa nacional.

Cuando los achuar exigieron que se tomaran las únicas medidas que, en su modesta opinión, podían frenar la contaminación causante de todos sus problemas de salud —la reinyección de las aguas de producción, aguas de elevadas temperaturas que tienen un alto contenido de sales, metales pesados y residuos de hidrocarburos—, no fueron tomados en cuenta. ¡Porque hasta hace apenas unos años era legal, en el Perú (uno de los pocos países del mundo), verter las aguas de producción

en ríos y quebradas, en lugar de reinyectarlas a los pozos de donde salieron junto con el crudo!

Fue entonces (2006) que los achuar del Corrientes comenzaron a tomar medidas más violentas, como la toma de instalaciones y el cierre de pozos, para ser escuchados por el Estado y Pluspetrol (por entonces, la empresa concesionaria del lote). Luego de varios días de negociaciones, se llegó a un acuerdo (Acta de Dorisa) por el cual la empresa se comprometía a reinyectar el 100% de las aguas de producción y a crear un fondo de S/.40 millones para atender un plan de salud desarrollado por los propios achuar.

Caso 2: los kandozi

En 1993 —veinte años después del inicio de exploraciones en el Abanico del Pastaza—, el gobierno peruano entregó en concesión otro lote petrolero en la zona, y la historia se repitió. Solo que esta vez fue peor.

La presencia de la empresa petrolera, en realidad, fue muy corta, pues en 1995, tras obtener resultados negativos, la Oxy (empresa que se había adjudicado el lote de 900 mil hectáreas) emprendió el retiro de la zona. Tras de sí, sin embargo, dejó una terrible estela de enfermedad para el pueblo kandozi, el grupo étnico al que le cupo en suerte habitar el lote entregado a la Oxy.

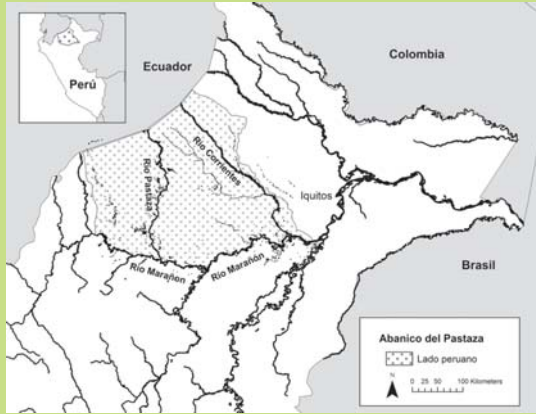
Al cabo de un tiempo del retiro de la Oxy, empezaron a aparecer los primeros casos de hepatitis B y Delta entre la población indígena, y, para 2000, la tasa de incidencia entre los kandozi era más



Millones de barriles de aguas tóxicas han sido vertidos en los ríos del Abanico del Pastaza.

Mapa de la disputa

Se conoce como Abanico del Pastaza a una enorme región amazónica ubicada al sur del Ecuador y al norte del Perú, caracterizada por su gran cantidad de humedales permanentes (pantanos de palmeras y otros tipos, lagos y ríos secundarios) y estacionales (bosques inundables y pantanos herbáceos). Se trata del abanico aluvial húmedo tropical más grande del mundo (más de 6 millones de hectáreas), 95% del cual está en territorio peruano, en el extremo



oeste del departamento de Loreto, al norte del río Marañón, entre los ríos Morona (por el oeste) y Tigre (por el este). El lago Rimachi —el más grande de la Amazonía peruana (30 km²) se encuentra en el abanico. Alberga una población indígena numerosa y diversa, con aproximadamente 20 mil nativos, pertenecientes a nueve grupos étnicos, entre ellos: achuar, kandozi, kichwa, shapra y huambisa. Hoy en día, casi el 100% de la porción peruana del Abanico del Pastaza se encuentra cubierto por lotes petroleros en diferentes estadios de desarrollo.

del doble de la tasa nacional³. En 2003 —tras siete años de solicitudes de ayuda a las autoridades—, el Ministerio de Salud declaró la zona como la de mayor riesgo de hepatitis B y Delta en el país, y empezó a desarrollar un programa de vacunación de recién nacidos. Fue así que se pudo controlar el contagio y, tal vez, prevenir la extinción de los kandozi como pueblo; sin embargo, hasta el día de hoy sigue muriendo gente joven y adulta a causa de su vulnerabilidad a la hepatitis.

Sembrando conflictos

Tanto en el caso de los kandozi como de los achuar del Corrientes, todavía es mucho lo que hay por hacer en cuanto a remediación ambiental de cochas, quebradas y ríos (que tomará mucho tiempo si se realiza apropiadamente) y salud humana (por ejemplo, prevenir la manifestación de futuras enfermedades y otros problemas en los niños achuar menores de dos años, que todavía tienen altos contenidos de plomo y cadmio en la sangre).

Sin embargo, el gobierno peruano, más preocupado por promover la inversión privada que por cuidar de la salud de sus ciudadanos, ya ha firmado contratos de exploración con varias empresas petroleras cuyos lotes se superponen con territorio ancestral achuar y kandozi —a pesar de la viva oposición de ambos grupos étnicos—. Más aún, la misma situación se está replicando a escala de toda la Amazonía peruana. Las semillas de futuros conflictos entre nativos y petroleras están sembradas. Y ha sido el Estado quien lo ha hecho con sus propias manos.

Notas

¹ Julio Postigo y Mariana Montoya. «Conflictos en la Amazonía: un análisis desde la ecología política». Debate Agrario 44. Cepes, Lima, 2009.

² Ministerio de Salud. Análisis de situación de salud del pueblo Achuar. Lima, 2006.

³ Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Kandozi y Shapra, frente a la hepatitis B: el retorno de lo visible. 2005. ●